

PoliticaPublica.cl

www.politicapublica.cl

Serie Prospectando Horizontes N°1

Balance 2007:

**Claves y enfoques del año
político**

Ximena Jara y Antoine Maillet (*)

Enero 2008

(*) Investigadores Instituto Igualdad (Santiago de Chile).

Contacto: xjara@puc.cl ; antoinemaillet@yahoo.fr

Una versión anterior de este documento ha sido publicada en el sitio web del Instituto (www.igualdad.cl)

Resumen: En este documento realizamos un balance de la actividad política en Chile durante el año 2007.

En la introducción, presentamos primero algunas ideas-fuerzas que emergieron y se estabilizaron en el transcurso de estos meses, y luego los acontecimientos que marcaron la discusión política.

Al adentrarnos en el análisis, tratamos en forma sucesiva el gobierno de la Presidenta Bachelet, la Concertación, coalición que lo apoya, y la oposición, la Alianza por Chile.

Para concluir, refutamos la acusación de “falta de gobernabilidad” que emergió en los últimos meses para caracterizar la situación del país, y preferimos hablar de proyección hacia un nuevo ciclo político que tarda a materializarse.

INTRODUCCIÓN

CONCEPTOS QUE MARCARON LA DISCUSIÓN

Con conceptos, nos referimos a las expresiones acuñadas en el medio periodístico y político que llegaron a ocupar un lugar central en la discusión política. Estos son los que retuvieron nuestra atención.

Los *liderazgos* han sido un foco de atención dentro del mundo político. Con esta palabra se busca sintetizar las calidades del hombre, o mujer, de Estado, capaz de unificar al pueblo, o por lo menos su sector, detrás de su persona, de hablar directamente, de mostrar el camino frente a una crisis. Es decir, una figura tradicional, que se ve debilitada por la posible emergencia de estilos distintos, tanto en el oficialismo como en la oposición.

La crítica al llamado “estilo Bachelet” llevó a la aparición de la tesis del “femicidio político”, en respuesta a las actitudes desafiantes de algunos personeros. La imprecisión de la crítica abrió la sospecha de un machismo mal escondido, lo que dio pie a una interpretación que tuvo alto impacto mediático pero que no implicó mayores consecuencias políticas. Lo relevante es que quedó instalado un debate sobre las calidades que son exigibles a un líder, en un momento de aumento de las demandas sociales.

La importancia de algunas movilizaciones y la expresión de un cierto descontento a pesar de los buenos resultados económicos, han llevado a algunos actores a tomar apuestas fuertes para reposicionarse en el juego político. El eje dictadura-democracia que estructuraba la contienda política desde la transición parece desdibujarse, lo que contribuyó a generalizar la discusión sobre el *fin de un ciclo político*. En ambas coaliciones algunos actores apuntan a captar este nuevo ambiente que se ha hecho manifiesto desde el fin del 2005. El *bacheletismo-aliancista* es una de estas apuestas que sorprendieron el mundo político, y que, más allá de su efecto mediático, dieron pie a la idea de una colaboración posible y necesaria.

En la política más operacional, la *construcción de mayoría* y la llamada “nueva política de acuerdos” han sido elementos centrales de la discusión, en la medida que tanto la incertidumbre generada por las disidencias puntuales y duraderas en el pacto de Gobierno, como la necesidad de contar con los votos de la oposición para las leyes de quórum calificado, han obligado el Ejecutivo a buscar otros

apoyos. Lo que en un principio pareciera ser una excepción para un Gobierno dotado de mayoría se ha ido transformando en el procedimiento normal a lo largo del año, proceso que podría continuar, de generarse una escisión mayor en la Concertación y concretamente en la DC.

Para lograr que esta mayoría no sea sólo circunstancial, la construcción de un nuevo referente transversal, *el pacto social*, ha sido clave. Constituye una buena síntesis entre la necesidad de responder las nuevas demandas sociales y el proyecto presidencial de conformar una amplia red de protección social en el país. Basado en múltiples fuentes, desde las intervenciones de la Iglesia Católica hasta una discusión académica impulsada por la CEPAL y cristalizada durante la cumbre Ibero-Americana, este discurso ha ganado legitimidad de forma transversal.

Por fin, el debate sobre las futuras *candidaturas presidenciales* ha tenido una presencia en filigrana que debería tomar fuerza el año que viene, siendo probablemente la espina dorsal de la actividad política del 2008. El adelanto de esta discusión se debe en parte a la reducción del período presidencial a cuatro años. El debate sobre un posible síndrome de “pato cojo” temprano ha sido a veces otra cara de las sospechosas dudas sobre el estilo Bachelet.

LOS TEMAS QUE MARCARON EL AÑO POLÍTICO

Agenda Social

El discurso del 21 de mayo marca, durante este año, la preeminencia de los contenidos sociales en la agenda legislativa. Las iniciativas para implementar políticas de mayor equidad en educación, previsión social, género (con aumento en salas cunas) y salud, entre otras, se convirtieron en el principal eje de las propuestas del Ejecutivo.

Durante el mes de julio, los conflictos laborales y la aprobación de un insuficiente sueldo mínimo posicionaron el debate sobre sindicatos, negociación colectiva y subcontratación en el centro de la discusión. A la discusión se sumó, a partir de agosto, el tópico del “sueldo ético”, que surgió con gran fuerza tras las declaraciones del obispo Alejandro Goic, y que cristalizó en el Consejo Asesor Presidencial para la Equidad y sus diversas comisiones de trabajo. Esta instancia marca un consenso nacional en torno a la necesidad de otorgar más equidad a nivel de políticas públicas. Abre, asimismo, el camino al Pacto Social, que se instaura en octubre formalmente con la discusión y el acuerdo en torno a la Ley General de Educación, y que alcanza su segundo éxito en el trabajo conjunto sobre seguridad.

Violencia y conflictividad social

Los conflictos sociales encontraron otro modo de canalización política del descontento. El grado de violencia en ellos aumentó, y la reacción policial, en algunos casos, también. La primera muestra de esta tendencia estuvo dada por la muerte del trabajador Rodrigo Cisternas, el 3 de mayo, durante la huelga de la empresa forestal Arauco, a manos de las fuerzas policiales.

La huelga de los trabajadores subcontratistas de Codelco, iniciada a fines de junio, y que se prolongó durante 37 días, también tuvo visos de mayor violencia, como quedó de manifiesto con el

incendio de ocho buses en El Teniente. La estrategia de empujar el límite de lo que hasta entonces era normal dentro de un conflicto laboral, para obligar al Estado a tomar parte en las acciones y soluciones, se establece como nuevo *modus operandii*, que también se hace observable en manifestaciones políticas, como la marcha de la Central Unitaria de Trabajadores, a fines de agosto. Esta situación ha despertado la preocupación de las cúpulas empresariales, quienes han planteado críticas al Gobierno al respecto, y que presentan una postura dividida entre los que entienden que una legislación laboral más justa es necesaria para frenar esta tendencia de conflictos y aquellos que han rigidizado su postura, negándose a asumir la necesidad de las modificaciones planteadas por el Gobierno, la Iglesia y los trabajadores.

Educación

Tras una negociación larga, que incluyó la coexistencia de dos proyectos de ley de educación, durante el mes de noviembre, se alcanzó un histórico acuerdo en la materia, que vino a coronar el primer gran éxito del Pacto Social.

El acuerdo alcanzado entre Concertación y Alianza representa un avance importante respecto de la LOCE. Entre sus modificaciones más emblemáticas están el fin de la selección para estudiantes de colegios públicos y subvencionados hasta sexto básico, la limitación del lucro por medio de la obligatoriedad para los sostenedores de tener como giro único la educación, la división de la enseñanza en dos ciclos de seis años, la creación de una Superintendencia de Educación, un Consejo Superior de Educación y una Agencia de Calidad.

No obstante, disensos dentro de la Concertación obligaron a firmar un protocolo de trabajo conjunto, con miras a concretar, en el mediano plazo, las mejoras pendientes para la educación pública, tanto desde el punto de vista de la organización político-territorial como de subvención y capacitación docente, entre otros temas. Todas estas implementaciones deben traducirse a proyectos de ley y deben comenzar a implementarse durante la actual administración.

El consenso en educación representa un importante triunfo político del Gobierno de Michelle Bachelet, del que, sin embargo, los estudiantes secundarios, iniciadores del proceso de cambio, quedaron marginados.

Paralelamente, el proceso de creación de salas cunas ha sido constante, de modo de cumplir con la promesa presidencial de asegurar educación preescolar para todos los niños, lo que implica, al mismo tiempo, un importante incentivo a la inserción laboral femenina.

Reforma Previsional: pilar solidario

Durante la primera mitad del año, la reforma provisional fue uno de los temas más visibles en la agenda legislativa. El punto clave del proyecto es la asignación de una Pensión Básica Solidaria de 75 mil pesos para los pensionados de escasos recursos, lo que constituye el centro del “pilar solidario”.

Los organismos públicos que tendrán la principal responsabilidad del sistema de previsión social serán: el Ministerio del Trabajo; la Subsecretaría de Previsión Social; la Superintendencia de

Pensiones; la Superintendencia de Seguridad Social; el Instituto de Previsión Social y el Instituto de Seguridad Laboral.

El 29 de agosto, el proyecto que modifica y perfecciona el sistema de pensiones, fue aprobado en la Cámara de Diputados, de modo que actualmente se encuentra en el su segundo trámite, en el Senado, con urgencia simple. La ley debería ser aprobada durante el primer semestre de 2008, para entrar en vigencia a partir del 1 de julio de 2008, como ha sido establecido originalmente por el programa. Uno de los puntos pendientes de la discusión es la inclusión de los bancos en la cotización provisional, que fue aprobada en la Cámara de Diputados y que, en cambio, podría generar conflicto en la discusión del Senado.

Salud

A fines de agosto, la Contraloría dio a conocer un informe sobre el funcionamiento del plan de Garantías Explícitas (AUGE), revelando un importante número de incumplimientos en materia de salud. Posteriores estudios revelaron que los incumplimientos, y el bajo número de reclamos frente a los mismos, se deben a una deficiente política comunicacional del Ministerio del ramo entre potenciales pacientes. A partir de esa fecha, se ha puesto énfasis en este punto crítico, a través de campañas comunicacionales.

Tanto en este ámbito, como en el de educación y reforma provisional, radica el eje de la agenda social del Gobierno, a la que se vienen a sumar materias de equidad como el trabajo y la negociación colectiva.

Seguridad

Bandera de lucha histórica de la derecha, a partir de septiembre se convirtió en una preocupación transversal, tras la muerte del Cabo Vera, la noche del 11 de septiembre, y luego de constatarse la existencia de un alto poder de fuego en las comunas periféricas de Santiago, con fuertes lazos con el narcotráfico. La agenda de la derecha sobre seguridad, y las medidas decretadas por el Gobierno en la materia, fueron la base del acuerdo, que resultó ser la segunda conquista política del llamado a la refundación de un “pacto social”.

Transantiago

Desde su fallida puesta en marcha, en febrero, ha sido el mayor error de políticas públicas implementadas por la Concertación, con millonarias pérdidas para el Estado, un subsidio permanente a tarifas y buses e incomodidades para los pasajeros de la capital. Fallas de diseño e implementación –como lo ha estipulado el informe de la comisión investigadora – se sumaron a un manejo político inconveniente, lo que potenció el conflicto, convirtiéndolo en el triste paradigma de los desaciertos administrativos.

Las consecuencias políticas del problema incluyen una sustantiva baja en la aprobación del Gobierno, de acuerdo con encuestas de opinión pública, la creación de una comisión investigadora que determinó responsabilidades, finalmente establecidas como fallas compartidas entre instancias políticas, técnicas, administrativas y legislativas. El informe final de la comisión también dejó claro que el voluntarismo y el tecnicismo no son sinónimo de éxito operativo, y que es el Estado el

llamado a asegurar y supervisar el buen funcionamiento de materias tan delicadas como el Transporte público.

I. EL GOBIERNO, LA AGENDA SOCIAL Y EL LIDERAZGO “BACHELET”

Aunque el Gobierno tenga un vínculo orgánico con su coalición, actúa también con una cierta independencia, según un calendario y con objetivos propios, lo cual le ha traído más de un roce con sus aliados políticos.

Al llegar al poder, se definió como prioridad la constitución de una red de protección social moderna. El principal eje de acción del Gobierno consistió en profundizar este enfoque, bajo diversas expresiones y fórmulas técnico-políticas. El discurso pronunciado por la Presidenta el 21 de mayo busca afirmar la *agenda social*, en un contexto donde ciertas movilizaciones acaparan la atención mediática.

Formación de mayorías: en la vía del acuerdo

El Consejo Asesor Presidencial para el Trabajo y la Equidad se forma en agosto con el fin de explorar soluciones innovadoras para resolver lo que se percibe como una remuneración a veces injusta del trabajo. Es una ilustración del estilo Bachelet, que busca construir un puente entre las temáticas sociales y la práctica gubernamental. En este sentido, es parte de una forma particular de buscar gobernabilidad, que sin embargo levanta ciertas dudas. Antes del cierre de la actividad de estos consejos, que ya se han dedicado a los temas de reforma previsional o de educación, no es claro todavía si responde adecuadamente a las aspiraciones ciudadanas o si busca encapsular ciertas controversias.

En septiembre nace la idea de formar un nuevo *pacto social*, que se revela, con sus resultados, como un instrumento muy eficiente para dar coherencia a las múltiples acciones del Gobierno que apuntaban a la efectividad de la agenda social. Además, revela tener una gran eficacia en la actividad política específica, a la hora de construir mayorías en el Parlamento para la aprobación de los proyectos gubernamentales. Abre una interesante premisa para el año 2008.

La necesidad de encontrar mayoría para los proyectos es una dificultad que no se previó, pero que ha tenido que enfrentar el Ejecutivo en su relación con el Congreso. El fenómeno “díscolos” no deja otra posibilidad, además de los proyectos emblemáticos para los cuales existe un quórum calificado. En un principio genera poco entusiasmo dentro de los parlamentarios, pero la iniciativa va a conocer varios éxitos, desde la sorpresiva proclamación del “bacheletismo-aliancista” hasta los éxitos de los acuerdos en educación y seguridad.

Gobernabilidad y liderazgo

Los éxitos intervinieron después de un período bastante difícil, marcado por los primeros meses del Transantiago y los conflictos laborales en diversos sectores, que dejaron en evidencia la cruda realidad de los trabajadores más desprotegidos. Frente a estas situaciones críticas, el Gobierno ha parecido dudar acerca del mejor camino para resolver estos problemas, lo que ha llevado a algunos

críticos a acusar un déficit en la conducción política. Sin llegar a este extremo, se ha podido sentir en estas ocasiones un desequilibrio entre los ministerios técnicos y el gabinete político.

Los últimos meses del año parecen demostrar que estas luchas internas cedieron el paso a un Gobierno más ordenado, que ha resuelto los dilemas con los que la disidencia de ciertos parlamentarios de la Concertación lo confrontó. Los acuerdos alcanzados en noviembre y diciembre fueron manifestaciones de un poder Ejecutivo más eficiente. Sin embargo, esta tendencia todavía no se refleja en las encuestas, donde la popularidad del Gobierno ha estado muy afectada por el Transantiago, aspecto que ha tenido, además, importantes repercusiones en términos de imagen país.

La desafección por el Gobierno está a veces atribuida al estilo Bachelet y a su forma específica de ejercer la Administración. Las insinuaciones más o menos insidiosas en este sentido dieron pie a la tesis del femicidio político, que enfatiza en lo sexista del argumento del liderazgo deficiente.

Más allá de esta polémica, el Gobierno ha visto logros importantes, como la expansión rápida de la cobertura escolar pre-infantil y la extensión de los beneficios del AUGE, opacados por las dificultades en transporte, y los problemas de seguridad. Es destacable en todo caso que la popularidad de la Presidenta misma se mantiene mucho más alta que la de su Gobierno, lo que lleva a esperar un repunte en el próximo año. Ha salido ilesa de los múltiples ataques de una derecha que ha pasado de una actitud muy confrontacional a recoger el guante de la nueva política de los acuerdos.

II. LA CONCERTACIÓN, LOS DÍSCOLOS Y EL “ETHOS” CONCERTACIONISTA

La situación de la Concertación ha estado marcada este año por los disensos al interior del pacto, una compleja relación con el Gobierno, y, en el segundo semestre, la crisis de la Democracia Cristiana, lo cual ha dejado al pacto oficialista con minoría en el Parlamento.

La discusión por las precandidaturas para el 2009 ha sido acallada en el conglomerado, para no entorpecer la acción del Gobierno e impedir la configuración de un síndrome del “pato cojo” adelantado, especialmente en un momento delicado en términos de relación de fuerza para el Gobierno.

Ruidos Internos: el fenómeno díscolo

La interacción con un Gobierno que en un principio quiso poner el énfasis en su autonomía ha sido compleja. Episodios emblemáticos, como el rechazo del proyecto de depreciación acelerada en el Senado (contra el cual votaron tres senadores de la Concertación), o el malestar que generó en el pacto la nominación de Gustavo Sciolla como Contralor General de la República, son muestra del rechazo que en ciertos sectores de la Concertación generó la preeminencia atribuida a Hacienda en las decisiones del Gobierno. Los Parlamentarios se mostraron también molestos por una cierta falta de diálogo interno antes del envío de las propuestas, crítica que se acentuó después de la inauguración de la nueva política de los acuerdos, cuando el diálogo con la derecha parecía prioritario.

Las votaciones clave, sin embargo, fueron afrontadas con disciplina incluso por los “díscolos”, salvo en el caso del senador Zaldívar, cuya oposición a la aprobación del presupuesto para el Transantiago detonó la explosión del conflicto DC.

A pesar de que el Congreso Ideológico del partido falangista implicó un arduo ejercicio de cohesión y acuerdo, que parecía promisorio para la línea social del pacto de Gobierno, los conflictos internos acabaron por imponerse. El enfrentamiento entre Soledad Alvear y Adolfo Zaldívar hizo crisis a partir de la votación por el Transantiago, y la posibilidad de la expulsión del senador abrió la puerta a las ambiciones presidenciales dentro de la DC (Frei, Alvear) y la Concertación en general (Insulza). Hoy, resuelta la salida del senador colorín, la amenaza se relaciona con la creación de un nuevo referente, y una escisión en el partido liderado por Alvear. La concreción de esta posibilidad implicaría perder la mayoría también en la Cámara de Diputados, y ciertamente obliga a la Concertación a pensar en nuevas y mejores estrategias de negociación.

La izquierdización de los contenidos políticos

La tendencia que se evidencia con más fuerza en la Concertación a partir de lo sucedido durante este año, es la del desdibujamiento del eje dictadura / democracia como clivaje ordenador del espectro político; la frontera entre la derecha y la izquierda no parece hoy tan rígida, y junto con la lucha de la derecha por posicionarse políticamente más al centro, las disidencias de la Concertación se posicionan en una línea limítrofe tan delgada con la derecha que llegan casi a franquearla. Por el otro lado, se produce también un acercamiento con la izquierda extra-parlamentaria, demostrando que las distinciones heredadas del plebiscito de 1988 no son impermeables.

En términos de contenidos de la agenda pública, este fenómeno se ha dado paradójicamente en paralelo con una izquierdización general de los partidos, que ha sido más acentuada en la DC, como se evidencia en las resoluciones del congreso ideológico, muy apegadas al *ethos concertacionista*. Otros muestras de este movimiento generalizado son la popularización de la discusión sobre el salario ético, el reconocimiento transversal de la legitimidad un subsidio para el transporte público en la capital y la actitud cooperativa de la UDI.

Y mientras la derecha intenta proclamar una “nueva mayoría” que los disidentes de la Concertación no han avalado ni propiciado todavía, el pacto de Gobierno asume su nueva situación minoritaria con intento de reordenar las filas y darle un sentido más social a sus postulados programáticos.

III- LA DERECHA: “DESALOJO” VERSUS LA LÓGICA DE COLABORACIÓN

La tesis del “desalojo”, inaugurada por el Senador Andrés Allamand (RN) en abril, pareció posicionarse como estrategia para la derecha de modo transversal; sin embargo, durante los meses siguientes, esta propuesta política chocó con otras miradas: la de quienes optaron por la colaboración y los acuerdos – especialmente después de que se inaugurara el Pacto Social – y la derecha empresarial. Esta última también se ha dividido entre los que están dispuestos a colaborar con las reformas propiciadas por el Gobierno y los que han rigidizado su postura crítica, específicamente frente a temas como la negociación colectiva, la subcontratación y la discusión acerca del “sueldo ético”.

Desencuentros entre las derechas

Controversias como la suscitada a partir de la discusión del proyecto de ley de depreciación acelerada (rechazado por los votos de la derecha), cuyo objetivo era aportar al desarrollo de las pymes, pero implicaba sobre todo beneficios para las grandes empresas, expresan la diferencia de opiniones dentro de un grupo que ya no actúa como un todo cohesionado. Otro ejemplo de esta contradicción entre una parte de la derecha política y la derecha empresarial, se vivió con la sanción decretada contra el autoproclamado candidato Sebastián Piñera (RN) por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), ocasión en la cual el ex candidato fue duramente criticado por la mayor parte de la UDI y el empresariado lo respaldó. Se abre, en torno a estos y otros temas, una brecha que tiende a acrecentarse en la medida en que la derecha se allana a dialogar en torno a temas como empleo y subcontratación, con representación técnica y política en el Comité Asesor para la Equidad.

El nuevo escenario no se corresponde con el tradicional eje liberal / conservador, que se había dado hasta ahora para dividir a la derecha, ni con la cohesión en torno a la línea divisoria dictadura / democracia, e introduce variables diferentes en el ordenamiento, algunas de las cuales se relacionan con un nuevo modo de entender el trabajo de oposición, que no excluye el acuerdo y que tiene, siempre, elementos de liderazgo personal.

Bacheletismo-aliancista: la vía de la cooperación

El escenario narrado explica la aparición de nuevas vetas, como el “bacheletismo-aliancista” de Joaquín Lavín (UDI), que busca beneficiarse de la imagen de la Presidenta y apuntar al tipo de liderazgo que explica su triunfo en enero del 2005. Tal autodefinición resultó efectiva: inmediatamente lo catapultó al centro de la discusión coyuntural y le permitió aumentar varios puntos en las encuestas con su actitud de disposición al diálogo.

Este espacio de interacción, y colaboración, rápidamente apropiado por los liderazgos de los partidos, abrió el camino para acuerdos como el de educación o el de seguridad. Sin embargo, “las derechas” han mantenido transversalmente una crítica contra el Gobierno de la Presidenta Bachelet por lo que estiman falta de liderazgo y de gobernabilidad.

El empresariado ha tenido también una disposición que oscila entre las declaraciones de buena disposición para tratar temas como el salario mínimo y la subcontratación (Sofofa) y las críticas implacables expresadas por Ovalle en la Enade, que dejan traslucir el temor que en su sector provocan los conflictos laborales y la voluntad del Gobierno y del ministro del Trabajo para mejorar la situación de los trabajadores.

Hoy, la gran disputa de la derecha está planteada en torno a las dos lógicas: colaboración o intransigencia. El rápido posicionamiento de Lavín cuando declaró su disposición al diálogo, más los cuatro puntos que ha subido la aprobación de la derecha – según Adimark – tras los acuerdos en seguridad y educación, prueban que en la medida en que se expresa una estrategia más constructiva, el electorado aumenta su disposición a votar por la derecha.

Esta veta está siendo explotada por Lavín, pero también por Piñera, las dos grandes figuras en competencia con vistas a las elecciones presidenciales del 2009. A diferencia de la UDI, que no ha dado todavía señales claras de apoyo al gremialista y se ha negado a definir candidatura antes de las elecciones municipales, Sebastián Piñera fue el primero en declarar abiertamente su ambición de ir una vez más en la carrera presidencial.

IV. CONCLUSIÓN: ¿CRISIS DE GOBERNABILIDAD O NUEVO CICLO POLÍTICO?

La gobernabilidad ha sido, desde el mandato de Patricio Aylwin, el sello de la Concertación, un imprescindible dentro de la gestión de una coalición muy marcada por el trágico fin de la Unidad Popular, mirada que afectaba especialmente al Partido Socialista. Este elemento fundamental de la práctica del poder por el pacto de Gobierno ha sido cuestionado como nunca en los últimos veinte años, a raíz de una serie de acontecimientos muy distintos. Poco tienen que ver los conflictos laborales en la Forestal Arauco, Codelco o Agrosuper, con las violencias antisociales de la noche del 11 de septiembre o durante el asalto de un banco en el centro de Santiago. Si bien las movilizaciones sociales fueron de una magnitud inédita en las últimas dos décadas, no se pueden resumir a algunos actos de violencia ocurridos al margen de ellas.

Sin embargo, se generó un cuestionamiento al manejo del Gobierno y a la situación global del país, con un tono muy alarmista. Estas críticas tienen su correlato directamente político en los alegados problemas de liderazgo de la Presidenta, o la supuesta “parlamentarización” del régimen que parece atemorizar a representantes empresariales.

Esta interpretación catastrofista no debe opacar la otra posibilidad de lectura más optimista que ofrece esta constelación de acontecimientos, y que dice relación con la posibilidad de la *apertura de un nuevo ciclo político*, con nuevos modos de participación y una distinción ideológica menos rígida.

El aumento de la conflictividad laboral tanto como el fenómeno díscolo pueden ser relativizados. No son necesariamente pruebas de un creciente desorden, sino que vienen a ilustrar las nuevas aspiraciones ciudadanas y la existencia de mayor espacio para la expresión crítica. Se evidencia un progresivo destape, donde la autocensura que marcó la transición se desvanece. Como un eco a las movilizaciones estudiantiles del 2006, varios movimientos han demostrado una real capacidad para imponer temas en la agenda pública, así que una cierta apertura para ello de parte de actores institucionales como los medios o la Iglesia Católica.

Una manifestación de la emergencia de estos nuevos actores ciudadanos ha sido la multiplicación de los concursos, sobre la “micro más vieja del Transantiago”, o el peor hoyo en el pavimento, que se realizan como formas lúdicas y de amplia difusión de protesta ciudadana.

Desafíos del nuevo ciclo

Si se confirma esta tendencia hacia un nuevo ciclo político, el desafío para todas las formaciones políticas es captar mejor este ambiente por principios favorable a la Concertación. La generalización de la discusión programática (DC, PPD, PS a venir) demuestra que el tema de la proyección hacia el futuro del pacto de Gobierno está instalado de manera transversal.

Queda por ver si se podrán superar varios problemas estructurales y sistémicos que ponen en peligro esta apertura, el mayor de ellos siendo el sistema de votación binominal. Su continuidad implica el riesgo de que las presiones no estén canalizadas y fomenten oposiciones asistémicas, al margen de instituciones percibidas como deficientes. Este temor se expresa en su forma más avanzada en la demanda por una asamblea constituyente, propuesta que crece en la Concertación, aunque pueda parecer lejos de las preocupaciones cotidianas de la ciudadanía. El sistema binominal, que obliga a los pactos a permanecer unidos para obtener réditos electorales, comienza a resentir importantes fracturas en el momento en el que el eje ordenador pierde fuerza. Esto implica, asimismo, el riesgo de que surjan liderazgos personalistas y se configuren alianzas en torno a cacicazgos, más que a relatos sociopolíticos.

La construcción de un Estado capaz de responder a las nuevas demandas ciudadanas, es otro desafío que se presenta para la Concertación. Las dificultades del Transantiago han evidenciado la existencia de problemas serios tanto por la calidad de su institucionalidad como por su capacidad técnica, que se inscriben también dentro del marco del fin de ciclo y de la necesidad de un salto cualitativo, donde modernizar no sólo puede significar disminuir los gastos y reducir el tamaño.

Tanto en el ámbito del transporte como de la Educación Pública se ha consagrado –en el caso de la Ley General de Educación, por escrito – la obligación del Estado de proveer estos servicios a todos los miembros de una sociedad, y de velar por su idóneo funcionamiento. Este hecho no es menor, puesto que confirma el reconocimiento, por parte de todo el espectro político, de que hay áreas que no pueden ser reguladas únicamente por lógicas de mercado, sino por directrices políticas, aun cuando el mercado esté implicado en ellas.